



Valledupar, Veintinueve (29) de julio del año dos mil Veintidós (2022).

Referencia: ACCION DE TUTELA.

Accionante: ELIBETH JOHANA MACHADO BELEÑO

Accionado: DEPARTAMENTO DE POLICIA CESAR

Vinculado: SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE SALUD DEL CESAR

Rad. 200013109002-2022-00068-00

Providencia: FALLO DE TUTELA

Procede el Juzgado a dictar el fallo correspondiente en la acción de tutela referenciada. En la cual se relacionan los siguientes:

I. HECHOS¹:

1. Tenga a su bien saber su señoría que, preste el servicio militar obligatorio adscrita al COMANDO DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA CESAR, que, con ocasión a dicha obligación constitucional, padecí quebrantos de salud, y actualmente aun me aquejan, y no he tenido el apoyo de mis comandantes para los tratamientos requeridos para mi salud.

2. En razón del hecho anterior su señoría, presente derecho de petición ante el comando de policía accionado, el día 6 de mayo de 2022 a fin de que, con los argumentos narrados en la petición, se procediera por parte del comandante, a elaborar el INFORMATIVO ADMINISTRATIVO POR LESION, documento este que es indispensable no solo para tener una referencia de la fecha de ocurrencia de los hechos, sino también, que es requerido para iniciar proceso de apertura de ficha medica unificada.

3. En este mismo orden de ideas, presente simultáneamente otro derecho de petición ante la misma entidad accionada, de fecha 6 de mayo de 2022, que a diferencia de la anterior petición, tenía como firme propósito, solicitar del comandante donde preste mi servicio militar, se ordenara la reactivación de los servicios médicos, a fin de que se me diera continuidad del tratamiento médico para dar apertura a la ficha medica unificada y posteriormente la realización de exámenes médicos, aunado a la práctica de los conceptos médicos por OFTALMOLOGIA, ODONTOLOGIA, FONOAUDIOLOGIA Y PSICOLOGIA; los anteriores conceptos médicos resultan determinantes para la realización de la junta medico laboral definitiva en la que determinara entre otras cosa, la real pérdida de capacidad laboral por las lesiones y patologías sufridas durante la prestación de mi servicio militar obligatorio. 2

4. Su señoría, es con fundamento en el principio de economía procesal que presento una misma acción de tutela para salvaguardar los derechos fundamentales enunciados en el presente escrito, si bien es cierto las petición tienen objetos diferentes pero que van en correlación con sus hechos, los mismo debían en su momento procesal, ser resueltos de manera oportuna según los términos exigidos por la jurisprudencia y la ley, por el COMANDO DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA CESAR, es a juicio del suscrito accionante que siento que se me han vulnerado los derechos protegidos por la constitución y que requieren su amparo urgente.

5. Señor Juez, es con urgencia que acudo a su despacho en sede de tutela para que a su juicio en derecho se sirva fallar de conformidad con los argumentos expuestos y los medios de conocimiento aportados con la presente tutela, y determina si le asiste o no protección a mis derechos fundamentales.

II. ACTUACIÓN PROCESAL:

El despacho al estudiar la demanda de tutela de referencia por venir en forma legal la demanda de tutela fue admitida mediante auto de fecha Diecinueve (19) de julio de Dos mil Veintidós (2022), notificándose a las partes sobre su admisión, y solicitando respuesta de los hechos presentados por el accionante a la parte accionada.

¹ Tomado textualmente de los hechos de la demanda.



III. CONTESTACION DE LA ACCIONADA²

La parte accionada **DEPARTAMENTO DE POLICIA CESAR** contestó la presente acción de tutela de la siguiente manera:

En cuanto a la petición radicada en el Comando del Departamento de Policía Cesar, me permito indicar a su señoría que una vez allegado el derecho de petición de fecha 06 de mayo de 2022, asignado con el radicado GE-2022-001953-DECES y la petición de fecha 09 de mayo de 2022, con radicado GE-2022-001980-DECES, de cuyas actuaciones se emitió respuesta detallada y de fondo conforme a las solicitudes del accionante mediante la comunicación oficial GS-2022-053318-DECES de fecha 01 de Junio de 2022, enviada desde el correo institucional deces.asjur@policia.gov.co a los correos electrónicos que aportó para efecto de notificaciones oscvarjclaro@gmail.com, con los respectivos acuses de enviado y entregado adjuntos. En la mencionada respuesta se deja claro varios aspectos a saber: 1. Con relación al informe administrativo por lesión, se adjuntaron los soportes allegados con la petición y se le estará comunicando una vez sea calificado. 2. Con relación a la reactivación de los servicios médicos, se le indicó que contaría por cuatro semanas adicionales posterior a la culminación del servicio militar y se le agendó cita con medicina laboral para evaluar la pertinencia de iniciar proceso médico laboral. Ahora bien, con relación al informe prestacional por lesión se indica que se elaboró bajo el radicado 074-2022, como lo establece el decreto 1796 de 2000, el cual se encuentra pendiente de comunicación a la señorita MACHADO BELEÑO, siendo pertinente mencionar que se encuentra citada para el día 29-07-2022, y posteriormente los trámites subsiguientes. Frente a la pretensión que hace valer con la petición de radicado de ingreso GE-2022-001952-DECES, a la misma se le dio contestación mediante comunicado GS-2022-056119-DECES, de fecha 08 de junio de 2022, de igual forma se procedió a tomar contacto con la ciudadana en el abonado telefónico y esta nunca contestó. Hasta aquí se puede evidenciar una falta de observación por parte de la hoy accionante en realizar la verificación de la bandeja de entrada del correo electrónico aportado para recibir notificaciones para verificar las respuestas a sus diferentes requerimientos y la citación para el inicio del proceso médico laboral, al cual no se ha presentado, lo que permite evidenciar una falta de interés y sí pone en funcionamiento sin argumentos el sistema judicial. Por otro lado, es pertinente traer a colación lo manifestado por la Unidad Prestadora de Salud Cesar mediante comunicado oficial GS-2022-074602-DECES, el cual se aporta y donde se corrobora lo aquí manifestado. De conformidad con lo planteado en líneas precedentes, se logra inferir razonadamente que el Departamento de Policía Cesar, no ha vulnerado ningún derecho al hoy accionante, pues como se indicó, se dio contestación a la petición dentro de los términos, esto es 12 días hábiles.

La entidad vinculada **SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE SALUD** quien fue debidamente

IV. PRETENSIONES³:

PRIMERO: TUTELAR por violación directa de la Constitución Nacional el derecho fundamental constitucionales de petición, quebrantado por el municipio de Valledupar, Cesar.

SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, ORDENAR para qué en un término no mayor a cuarenta y ocho (48) horas la Secretaria de Hacienda de Valledupar, resuelva, decida y comunique la decisión frente a lo petitionado en marzo y abril de 2022 por parte de Telefónica que en derecho corresponda

TERCERO: Las demás decisiones que sean del caso en la medida que garanticen y protejan el derecho fundamental de mi representada.

V. DERECHO FUNDAMENTAL TUTELADO:

El accionante considera que, con los anteriores hechos se está vulnerando su derecho de petición.

VI. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO:

² Tomado textualmente de la contestación de la entidad accionada

³ Tomado textualmente de la acción de tutela.



La acción de tutela se ha dicho en reiteradas oportunidades está consagrada en el Art. 86 de la Constitución Política Nacional, como un instrumento jurídico al alcance de cualquier persona, con el cual puede obtener la protección específica e inmediata de sus derechos fundamentales, cuando estos resulten amenazados o violados por la acción u omisión de las autoridades públicas o de los particulares en aquellos casos autorizados por la ley.

6.1. REGULACION LEGAL DEL DERECHO DE PETICION.

El derecho de petición consagrado en el artículo 23 de la Constitución Nacional, es un derecho público subjetivo de la persona para acudir ante las autoridades, organizaciones privadas que establezca la ley, con miras a obtener pronta resolución a una solicitud o queja.

A diferencia de los términos y procedimientos jurisdiccionales, el derecho de petición es una vía expedita de acceso directo a las autoridades. Aunque su objeto no incluye el derecho a obtener una Resolución determinada, sí exige que exista un pronunciamiento oportuno.

Cuando se hace una petición a las entidades públicas o privadas y estas no la responden dentro del término legalmente establecido en la norma, es motivo para instar a la entidad a dar solución inmediata a la petición, a través de la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de nuestra Carta Política, siendo esta un instrumento jurídico al alcance de cualquier persona, con la cual se puede obtener la protección específica e inmediata de los derechos fundamentales, cuando estos resulten amenazados o violados por la acción u omisión de las autoridades públicas, o de los particulares en aquellos casos autorizados por la Ley.

A si las cosas, tenemos que, de las circunstancias obrantes en el expediente, se puede colegir que el accionante pretende se tutele en su favor por violación al derecho de petición, regulado por el artículo 23 de la Constitución Política de Colombia, teniendo en cuenta que la accionada dio respuesta oportuna a su petición.

La Corte Constitucional ha establecido que el derecho de petición al igual que los demás derechos constitucionales no tienen “per se” el carácter de absolutos, pues cuentan con los límites previstos por los derechos de los demás y el orden jurídico.

Es un deber de todo ciudadano respetar los derechos de los demás y no abusar de los propios, son principios intrínsecos que van inmersos en el actuar de todos los ciudadanos colombianos, pero en especial de los funcionarios públicos.

En términos generales, puede decirse que el derecho de petición, se establece legal y constitucionalmente a favor de todas las personas. Cabe resaltar que, para la efectividad del mismo, quien hace uso de este medio, debe cumplir además de las exigencias establecidas en la norma que le da vida jurídica al mismo, la Constitución Política de Colombia, con los requisitos formales establecidos en la ley 1755 de 2015.

Por tanto, tenemos en primer lugar, como característica primordial que la petición debe ser respetuosa, puesto que si no lo fuere y se incumple con este requisito se exime de la obligación de responder a quien se invoca, por incumplimiento de las condiciones del artículo 23 de la Constitución Política.

En segundo lugar, el derecho de petición puede ser: por interés general, por interés particular, por petición de informaciones, o por consultas.

Cuando se trata de información, esta debe ser veraz e imparcial e inalterada, y puede ser general: acceso a documentos sobre el origen, estructura, funcionamiento, naturaleza, procedimientos etc. y particular: información que se produzca por el ejercicio de sus



funciones o que repose en la entidad, exceptuándose el caso de los documentos sometidos a reserva por disposición de la ley o la Constitución Nacional.

Adicionalmente a lo anterior, tenemos que en los apartes de la norma citada se establece los términos en que deben resolverse las peticiones, las cuales serán atendidas de la siguiente manera:

“Términos para resolver las distintas modalidades de peticiones. Salvo norma legal especial y so pena de sanción disciplinaria, toda petición deberá resolverse dentro de los quince (15) días siguientes a su recepción. Estará sometida a término especial la resolución de las siguientes peticiones:

1. Las peticiones de documentos y de información deberán resolverse dentro de los diez (10) días siguientes a su recepción. Si en ese lapso no se ha dado respuesta al peticionario, se entenderá, para todos los efectos legales, que la respectiva solicitud ha sido aceptada y, por consiguiente, la administración ya no podrá negar la entrega de dichos documentos al peticionario, y como consecuencia las copias se entregarán dentro de los tres (3) días siguientes.

2. Las peticiones mediante las cuales se eleva una consulta a las autoridades en relación con las materias a su cargo deberán resolverse dentro de los treinta (30) días siguientes a su recepción.

Parágrafo. Cuando excepcionalmente no fuere posible resolver la petición en los plazos aquí señalados, la autoridad debe informar esta circunstancia al interesado, antes del vencimiento del término señalado en la ley expresando los motivos de la demora y señalando a la vez el plazo razonable en que se resolverá o dará respuesta, que no podrá exceder del doble del inicialmente previsto.”

6.2. PROBLEMA JURÍDICO:

Corresponde al Juzgado determinar si la entidad accionada DEPARTAMENTO DE POLICIA CESAR, ha vulnerado el derecho fundamental de petición de la accionante ELIBETH JOHANA MACHADO BELEÑO

6.3. DEL CASO EN CONCRETO

Descendiendo a el sub exánime, observa este Despacho que el accionante manifiesta haber presentado un derecho de petición ante DEPARTAMENTO DE POLICIA CESAR, el día seis (06) de mayo de 2022, manifiesta al momento de presentar la acción de tutela no obtener respuesta a su petición por lo considera que su derecho fundamental ha venido siendo vulnerado por la entidad accionada.

En consecuencia, le corrió traslado a la entidad accionada **DEPARTAMENTO DE POLICIA CESAR**, quienes manifestaron haber dado respuesta a la petición realizada por la accionante, el día primero (01) de junio de 2022, en ese sentido de las pruebas aportadas por la entidad accionada el despacho observa que se ha brindado una respuesta de fondo a lo solicitado por la accionante.

Ahora bien, la Corte Constitucional en sentencia C- 418 de 2017 reiteró que el ejercicio del derecho de petición se rige por las siguientes reglas y elementos de aplicación:

“1) El de petición es un derecho fundamental y resulta determinante para la efectividad de los mecanismos de la democracia participativa.

2) Mediante el derecho de petición se garantizan otros derechos constitucionales, como los derechos de acceso a la información, la libertad de expresión y la participación política.

3) La respuesta debe satisfacer cuando menos tres requisitos básicos: (i) debe ser oportuna, es decir, debe ser dada dentro de los términos que establezca la



ley; (ii) la respuesta debe resolver de fondo el asunto solicitado. Además de ello, debe ser clara, precisa y congruente con lo solicitado; y (iii) debe ser puesta en conocimiento del peticionario.

4) *La respuesta no implica necesariamente la aceptación de lo solicitado, ni se concreta necesariamente en una respuesta escrita. (...)*

Lo que demuestra que, la accionada dio respuesta a las peticiones solicitadas por la peticionaria y que dieron origen a la presente demanda de tutela, al dar una respuesta, clara, congruente y de fondo a lo solicitado por el peticionario, según los documentos anexado en la contestación de la presente acción constitucional.

Respecto a la figura de la carencia actual de objeto por hecho superado, la Corte Constitucional se pronunció en Sentencia T- 021 del 20 de febrero de 2017, con ponencia del Magistrado Luis Guillermo Guerrero Pérez, y ha señalado que esta se presenta en la acción de tutela cuando frente a la solicitud de amparo del actor, la orden del Juez de tutela carece de efectos, precisando que la misma acontece cuando se está ante un daño consumado o ante un hecho superado.

En esa sentencia textualmente dijo el máximo tribunal constitucional:

“La jurisprudencia de esta Corporación, en reiteradas oportunidades, ha señalado que la carencia actual de objeto sobreviene cuando frente a la petición de amparo la orden del juez de tutela no tendría efecto alguno o caería en el vacío. Al respecto se ha establecido que esta figura procesal, por regla general, se presenta en aquellos casos en que tiene lugar un daño consumado o un hecho superado.

En cuanto al daño consumado, la jurisprudencia ha admitido que el mismo tiene ocurrencia cuando la amenaza o la transgresión del derecho fundamental ya ha generado el perjuicio que se pretendía evitar con el mecanismo preferente de la tutela, de manera que resulta inocuo para el juez impartir una orden en cualquier sentido. Así las cosas, el daño consumado supone que no es posible hacer cesar la violación o impedir que se concrete un peligro y, por ello, tan sólo es procedente el resarcimiento del daño originado por la violación del derecho. En este escenario, esto es, con el fin de obtener una reparación económica, entiende la Corte que la acción de tutela resulta—por regla general— improcedente, pues su naturaleza es eminentemente preventiva y no indemnizatoria. De manera que, en relación con este fenómeno, los jueces de instancia y la propia Corte deben declarar la improcedencia de la acción, a menos que —bajo ciertas circunstancias— se imponga la necesidad de pronunciarse de fondo por la proyección que pueda tener un asunto, en virtud de lo previsto en el artículo 25 del Decreto 2591 de 1991, o por la necesidad de disponer correctivos frente a personas que puedan estar en la misma situación o que requieran de especial protección constitucional.

Por su parte, el hecho superado tiene ocurrencia cuando lo pretendido a través de la acción de tutela se satisface y desaparece la vulneración o amenaza de los derechos fundamentales invocados por el demandante, de suerte que la decisión que pudiese adoptar el juez respecto del caso específico resultaría a todas luces inocua y, por lo tanto, contraria al objetivo de protección previsto para el amparo constitucional.

En este supuesto, no es perentorio incluir en el fallo un análisis sobre la vulneración de los derechos cuya protección se demanda, salvo “si considera que la decisión debe incluir observaciones acerca de los hechos del caso estudiado, [ya sea] para llamar la atención sobre la falta de conformidad constitucional de la situación que originó la tutela, o para condenar su ocurrencia y advertir la inconveniencia de su repetición, so pena de las sanciones pertinentes, si así lo considera. De otro lado, lo que sí resulta ineludible en estos casos, es que la providencia judicial incluya la demostración de la reparación del derecho antes del momento del fallo. Esto es, que se demuestre el hecho superado”.

Precisamente, en la Sentencia T-045 de 2008, se establecieron los siguientes criterios para determinar si en un caso concreto se está o no en presencia de uno de tales hechos, a saber:



“1. Que con anterioridad a la interposición de la acción exista un hecho o se carezca de una determinada prestación que viole o amenace violar un derecho fundamental del accionante o de aquél en cuyo favor se actúa.

2. Que durante el trámite de la acción de tutela el hecho que dio origen a la acción que generó la vulneración o amenaza haya cesado.

3. Si lo que se pretende por medio de la acción de tutela es el suministro de una prestación y, dentro del trámite de dicha acción se satisface ésta, también se puede considerar que existe un hecho superado.”

Vistas las anteriores consideraciones, es evidente que en el asunto en estudio se presenta la carencia actual de objeto por hecho superado, ya que la entidad accionada, dio respuesta al derecho de petición presentado por el accionante, de ahí que la acción de tutela pierda su razón de ser en este caso concreto, pues la orden que pudiera impartir el juez de tutela no tendría ningún efecto práctico al haberse superado la situación de hecho que produjo que la tutelante, incoara el resguardo constitucional, es decir, el motivo que generó la acción ya desapareció. Por lo tanto, se negará la presente acción por ser un hecho superado.

En mérito de lo expuesto el Juzgado Segundo De Pequeñas Causas y Competencias Múltiples de Valledupar, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley

RESUELVE:

PRIMERO: NEGAR, la presente acción de tutela instaurada por **ELIBETH JOHANA MACHADO BELEÑO**, contra **DEPARTAMENTO DE POLICIA CESAR**, por tratarse de un **HECHO SUPERADO**.

SEGUNDO: Notifíquese este fallo por secretaria, o por el medio más eficaz (oficio o telegrama).

TERCERO: En caso de ser impugnado el presente fallo, envíese por secretaria a la oficina judicial para que se surta el reparto correspondiente, en caso de no serlo, envíese a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE,

El Juez,


JOSSUE ABDON SIERRA GARCÉS
JUEZ



REPUBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA
JUZGADO 2° DE PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIAS MÚLTIPLES
CRA 12 No 15-20 EDIFICIO SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS, PISO 3
VALLEDUPAR - CESAR
Tel: 5801739



Valledupar, Veintinueve (29) de julio del año dos mil Veintidós (2022).

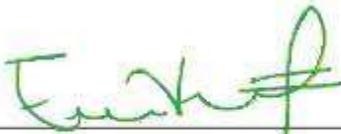
Oficio No. 2596

Señor(a):
ELIBETH JOHANA MACHADO BELEÑO
Correo electrónico:

Referencia: ACCION DE TUTELA.
Accionante: ELIBETH JOHANA MACHADO BELEÑO
Accionado: DEPARTAMENTO DE POLICIA CESAR
Rad. 200013109002-2022-00068-00
Providencia: FALLO DE TUTELA

NOTIFICAR FALLO DE TUTELA DE FECHA VEINTINUEVE (29) DE JULIO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS (2022) QUE EN PARTE RESOLUTIVA DICE **PRIMERO: NEGAR**, la presente acción de tutela instaurada por **ELIBETH JOHANA MACHADO BELEÑO**, contra **DEPARTAMENTO DE POLICIA CESAR**, por tratarse de un **HECHO SUPERADO**. **SEGUNDO:** Notifíquese este fallo por secretaria, o por el medio más eficaz (oficio o telegrama). **TERCERO:** En caso de ser impugnado el presente fallo, envíese por secretaria a la oficina judicial para que se surta el reparto correspondiente, en caso de no serlo, envíese a la Corte Constitucional para su eventual revisión. NOTIFIQUESE Y CUMPLASE. El Juez. *fd.* **JOSSUE ABDON SIERRA GARCES**.

Atentamente,


ESTEFANIA VILLAMIZAR LARRAZABAL
Secretaria



REPUBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA
JUZGADO 2° DE PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIAS MÚLTIPLES
CRA 12 No 15-20 EDIFICIO SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS, PISO 3
VALLEDUPAR - CESAR
Tel: 5801739



Valledupar, Veintinueve (29) de julio del año dos mil Veintidós (2022).

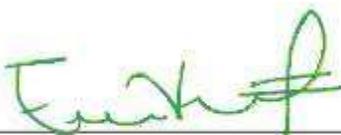
Oficio No. 2597

Señor(a):
DEPARTAMENTO DE POLICIA CESAR
Correo electrónico:

Referencia: ACCION DE TUTELA.
Accionante: ELIBETH JOHANA MACHADO BELEÑO
Accionado: DEPARTAMENTO DE POLICIA CESAR
Vinculado: SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL
Rad. 200013109002-2022-00068-00
Providencia: FALLO DE TUTELA

NOTIFICAR FALLO DE TUTELA DE FECHA VEINTINUEVE (29) DE JULIO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS (2022) QUE EN PARTE RESOLUTIVA DICE **PRIMERO: NEGAR**, la presente acción de tutela instaurada por **ELIBETH JOHANA MACHADO BELEÑO**, contra **DEPARTAMENTO DE POLICIA CESAR**, por tratarse de un **HECHO SUPERADO**. **SEGUNDO:** Notifíquese este fallo por secretaria, o por el medio más eficaz (oficio o telegrama). **TERCERO:** En caso de ser impugnado el presente fallo, envíese por secretaria a la oficina judicial para que se surta el reparto correspondiente, en caso de no serlo, envíese a la Corte Constitucional para su eventual revisión. NOTIFIQUESE Y CUMPLASE. El Juez. *fd.* **JOSSUE ABDON SIERRA GARCES**.

Atentamente,


ESTEFANIA VILLAMIZAR LARRAZABAL
Secretaria